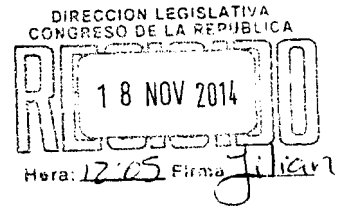




00000008



*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.*

CLPC-OGR/ml/077-2014

13 de noviembre de 2014

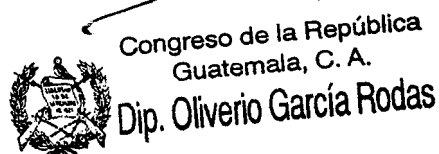
**Licenciada
Ana Isabel Antillón
Directora Legislativa
Congreso de la República
Su Despacho**

Licenciada Antillón:

De manera atenta me dirijo a usted y de conformidad con lo regulado en los artículos 39, 40 y 41 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, adjunto el **DICTAMEN FAVORABLE**, emitido por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, el día 02 de septiembre de 2014, a la **Iniciativa de Ley número 4789**, que dispone aprobar **Reformas al Decreto 17-73 del Congreso de la República, Código Penal**.

Sin otro particular.

**Diputado Oliverio García Rodas
Presidente**



Congreso de la República
Guatemala, C. A.

Dip. Oliverio García Rodas



COMISION DE LEGISLACION
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES
CONGRESO DE LA REPUBLICA
GUATEMALA, C. A.



00000009

*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales
Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

DICTAMEN 20-2014

INICIATIVA No. 4789

**REFORMAS AL DECRETO NÚMERO 17-73 DEL CONGRESO DE LA
REPÚBLICA, CÓDIGO PENAL**

HONORABLE PLENO

ANTECEDENTES

El treinta de enero de dos mil catorce, el Honorable Congreso de la República conoció la iniciativa de ley registrada con el número **4789**, que contiene la reforma al decreto 17-73 del Congreso de la República, Código Penal, misma que fue remitida y recibida el 10 de febrero del presente año en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, para su estudio, análisis y procedente dictamen. Dicha iniciativa fue presentada por el Diputado Carlos Rafael Fión Morales.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA.

En la iniciativa se argumenta que es el Registro de la Propiedad la institución pública encargada de inscribir, anotar y cancelar los actos y contratos relativos al dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles y muebles identificables, en consecuencia los guatemaltecos debiéramos de contar con la certeza jurídica y la seguridad registral en todos los actos y contratos relacionados con el dominio de los bienes.

Se indica que actualmente hay inseguridad registral, ya que se sabe que existen grupos organizados que se dedican exclusivamente al robo de propiedades en el que se ven involucrados notarios y empleados de ambos Registros de la Propiedad en Guatemala.



00000010

Comisión de Legislación y

Puntos Constitucionales

Congreso de la República

Guatemala, C.A.

Relaciona legalmente el Código Penal, el cual contempla en los artículos 321 y 322 los delitos de falsedad material y falsedad ideológica, cuya pena a imponer es de 2 a 6 años de prisión, en consecuencia puede otorgarse el beneficio de la suspensión condicional de la pena lo que implica que los autores o cómplices se benefician al momento de dictar sentencia toda vez que, no imperativamente deben ir a prisión.

Así mismo expone que son varias las consecuencias que sufren las personas agraviadas, como lo es la necesidad de incurrir en gastos para restituir su derecho o el riesgo que corre su vida o la de su familia al enfrentarse a éstos grupos organizados que en comparación con la sanción penal, da un resultado injusto y desproporcionado que origina impunidad.

Concluye en la exposición de motivos que, los delitos de falsedad material e ideológica por las penas insignificantes y desproporcionadas, es necesario incrementarlas así como inhabilitar permanentemente a los Notarios para el ejercicio del Notariado de tal forma que las penas sean una medida disuasiva para Notarios y empleados de los Registros que se presten a la realización de tales delitos.

CONSIDERACIONES LEGALES Y CONSTITUCIONALES

En la Constitución Política de la República de Guatemala, se consagra el deber del Estado de garantizar a los habitantes la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Además deja claro en su artículo primero que el fin supremo del Estado de Guatemala es la realización del bien común.

Así mismo el artículo 39 Constitucional establece que la propiedad privada "Se garantiza como un derecho inherente a la persona humana. Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley. El Estado garantiza el ejercicio de este derecho y deberá crear las condiciones que faciliten al propietario el uso y disfrute de sus bienes, de manera que se alcance el progreso individual y el desarrollo nacional en beneficio de los guatemaltecos."



00000011

*Comisión de Legislación y**Puntos Constitucionales**Congreso de la República**Guatemala, C.A.***ANALISIS Y CONSIDERACIONES**

Esta Comisión estima que, el análisis, la exposición del derecho, la fáctica y la proposición del diputado ponente es la correcta, adecuada y que corresponde a los hechos actuales, especialmente porque el apoderamiento ilícito de bienes inmuebles se ha convertido en uno de los delitos que brindan jugosas ganancias y de los más temidos por su mayor impacto en la sociedad, cierto es que, los grupos que se dedican a estas actividades, están bien organizados y cuentan con asesorías profesionales, además de personal que ejecuta acciones contra la vida, la integridad de la persona, además de amenazas, extorsiones y toda clase de males de su ocurrencia que ejecutan con el fin de intimidar a los legítimos propietarios de los inmuebles.

Por otro lado, es importante tener en cuenta y aprovechar la iniciativa para hacer extensiva la modificación legal que se pretende, toda vez que, la ejecución de los elementos que integran y tipifican éstos delitos, también actúan en otras esferas causando igual o mayor daño en la población, entre ellos los hechos que tienen relación con la falsificación de títulos universitarios, de la inscripción o clonación de identificación de personas que causan mal en nombre de personas honestas, falsificando inscripciones en el Registro Nacional de las Personas, en igual forma en la Dirección General de Migración donde afectan los pasaportes personales y a la población en general por causarles grandes perjuicios, a veces irreparables o para su reparación requieren fuertes gastos de dinero y en muchos casos no pueden económicamente enmendar los problemas causados.

Por último, la Comisión estima también que los hechos y las penas antes indicadas se deben agregar al primer párrafo de los artículos 321 y 322 del Código Penal, el cual no se modifica en consideración que existen falsedades causadas por personas sin estudio que modifican documentos de menor importancia, que alteran al escribir sobre ellos datos que no persiguen el fin de hacer daño a terceras personas, sin embargo alteran documentos públicos quienes por su inexperiencia no debe imponérseles penas mayores que impidan su integración en la sociedad, tomando en



00000012

Comisión de Legislación y

Puntos Constitucionales

Congreso de la República

Guatemala, C.A.

cuenta que el moderno derecho penal, que antes de ser represivo trata de guardar el correspondiente equilibrio social en casos de bajo impacto que no denotan peligrosidad social, en consecuencia tomando en cuenta el espíritu e intención del legislador contenido en ésta iniciativa se agregarían a los artículos 321 y 322 párrafos especiales para la agravación de las penas en los casos antes indicados.

DICTAMEN

En base a las consideraciones y análisis respectivo, con base en las consideraciones anteriormente expuestas se estima procedente emitir **DICTAMEN FAVORABLE** a la iniciativa número **4789** por ser un proyecto de Decreto viable, necesario, oportuno, conveniente y constitucional.

Dado en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, en la ciudad de Guatemala el día dos de septiembre de dos mil catorce.


Oliverio García Rodas
Presidente

Carlos Enrique López Girón
Vicepresidente

Alicia Dolores Beltrán López
Secretaria

Luis Pedro Álvarez Morales


José Alejandro Arévalo Alburéz



Comisión de Legislación y

Puntos Constitucionales

Congreso de la República

Guatemala, C.A.

Jorge Mario Barrios Falla

Manuel de Jesús Barquín Durán

César Augusto Del Águila López

Orlando Blanco Lapola

Walter Rolando Félix López

Pedro Gálvez Hernández

José Alberto Gándara Torrebiarte

Carlos Valentín Gramajo Maldonado

Pedro Muadi Menéndez

Amílcar de Jesús Pop Ac

Juan José Porras Castillo

Emmanuel Seidner Aguado

Mario Rolando Torres Marroquín

DECRETO No. _____

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA.**CONSIDERANDO**

Que el Estado se organiza para proteger a la persona, su fin supremo es el bien común, que dicha organización busca garantizar a todos los habitantes de la República, la vida, libertad, justicia, seguridad, paz y desarrollo integral de la persona.

CONSIDERANDO:

Que los delitos de falsedad material y falsedad ideológica contenidos en el Código Penal, son sancionados con penas cuya poca drasticidad no inhibe o no disuade en forma determinante a aquellos individuos que cometen estos delitos, por lo que se hace necesario poner énfasis en la drasticidad de los correctivos legales que deben aplicárseles.

POR TANTO:

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el literal a) del artículo 171 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el Honorable Congreso de la República;

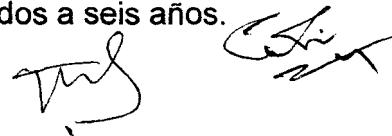
DECRET A:

Las siguientes:

**REFORMAS AL CÓDIGO PENAL, DECRETO 17-73 DEL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA.**

ARTÍCULO 1. Se reforma el artículo 321 del Código Penal, el cual queda así:

"Artículo 321 Falsedad Material. Quien, hiciere en todo o en parte, un documento público falso o alterare uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, será sancionado con prisión de dos a seis años.



Cuando el documento se relaciona con inscripciones en los Registros de la Propiedad que afecten o limiten: el dominio de la propiedad de cualquier forma, la creación o modificación de títulos universitarios, de documentos personales de identidad, datos personales de nacimiento o identificación en el Registro Nacional de Las Personas, de Pasaportes, clonación o uso indebido de tarjetas de crédito, la pena de prisión será de 9 a 15 años.

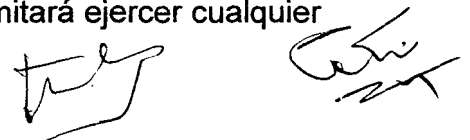
Si el responsable, como autor o cómplice, fuere empleado, operador que labore por contrato, que realice la operación registral en los Registros de la Propiedad existentes en la fecha de ejecución del hecho, del Registro de Información Catastral, de las Universidades del país, del Registro Nacional de las Personas, de la Dirección General de Migración, Notario o profesional liberal, la pena será aumentada en una tercera parte y será sancionado adicionalmente con la inhabilitación especial que le limitará ejercer cualquier cargo en la Administración Pública, en el caso de profesionales la prohibición de ejercer su profesión por el plazo de tres años.

ARTÍCULO 2. Se reforma el artículo 322 del Código Penal, el cual queda así:

Artículo 322. Falsedad Ideológica. Quien con motivo del otorgamiento, autorización o formalización de un documento público, insertare o hiciere insertar declaraciones falsas a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio será sancionado con prisión de dos a seis años.

Cuando el documento se relaciona con inscripciones en los Registros de la Propiedad que afecten o limiten: el dominio de la propiedad de cualquier forma, la creación o modificación de títulos universitarios, de documentos personales de identidad, datos personales de nacimiento o identificación en el Registro Nacional de Las Personas, Pasaportes, clonación o uso indebido de tarjetas de crédito, la pena de prisión será de 9 a 15 años.

Si el responsable, como autor o cómplice, fuere empleado, operador o labore por contrato que realice la operación registral, en los Registros de la Propiedad existentes en la fecha de ejecución del hecho, del Registro de Información Catastral, de las Universidades del país, del Registro Nacional de las Personas, de la Dirección General de Migración, Notario o profesional liberal, la pena será aumentada en una tercera parte y será sancionado adicionalmente con la inhabilitación especial que le limitará ejercer cualquier



cargo en la Administración Pública, en el caso de profesionales la prohibición de ejercer su profesión por el plazo de tres años.

ARTÍCULO 3. El presente decreto entra en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN,
PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN.

DADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EN EL PALACIO DEL
ORGANISMO LEGISLATIVO, EL DÍA _____ DE _____ DEL
AÑO DOS MIL CATORCE. *[Signature]*

[Signature]



COMISION DE LEGISLACION
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES
CONGRESO DE LA REPUBLICA
GUATEMALA, C. A.